



DOS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EFICACIA CIVIL DE RESOLUCIONES CANONICAS EN MATERIA MATRIMONIAL

JOAQUIN MANTECON SANCHO

Presentación

Las dos sentencias objeto de estas líneas versan sobre la eficacia civil de resoluciones eclesiásticas en materia matrimonial. En los dos supuestos se solicita el amparo constitucional por presunta violación de los artículos 14, 16 y 24 de la Constitución, y en ambos casos el Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado considerando infringido el artículo 24.1.

En los dos casos se ha cometido por parte del Juez civil una aplicación indebida de la norma supuestamente aplicable, y aunque este error no conlleve en si mismo una infracción de los principios constitucionales, en la medida en que el error incide en el goce de un derecho constitucional (cual era, en los supuestos estudiados, la tutela judicial efectiva), tiene relevancia suficiente para recibir el amparo constitucional.

Esta sería, esquemáticamente, la base de la doctrina sentada por nuestro Alto Tribunal. El hecho de que no se aceptara, como infundada, la invocada violación de los artículos 14 y 16, ha impedido que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre aspectos ciertamente relevantes para nuestra disciplina, si bien, y aunque de manera accesorio y tangencial, no ha dejado de realizar algunas consideraciones interesantes al respecto, como luego veremos.

Aunque el estudio de estas dos sentencias podría realizarse de manera conjunta -tantos son los puntos de contacto-, prefiero comentarlas separadamente con el fin de avalorar los matices doctrinales que fundamentan ambas resoluciones.

Sentencia 66/82, de 12 de noviembre

Comenzaremos por la sentencia de 12 de noviembre de 1982. Doy por sentados los hechos -harto conocidos, dada la antigüedad y notoriedad de la sentencia-, y paso directamente al comentario de aquellos fundamentos de derecho que puedan ser de nuestro interés.

Comienza el Tribunal Constitucional por abordar un aspecto en apariencia meramente procesal -procedimental-, pero que incide y condiciona el amparo constitucional en aquellos casos en que es de aplicación la Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/1981 de 7 julio.

El problema se plantea cuando dicho precepto ha de ser puesto en relación con el artículo 44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que autoriza el recurso de amparo siempre que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial. Es decir, el Tribunal Constitucional sólo puede entrar en el fondo de las cuestiones planteadas cuando el recurrente haya agotado la vía procesal sin haber obtenido la protección de los derechos invocados¹.

Concretamente, y en nuestro caso, ¿es necesario para recurrir en amparo el haber agotado también la vía procesal del «procedimiento correspondiente»? o ¿dada la irrecurribilidad del auto en cuestión se puede acudir al amparo directamente?².

A este respecto el Tribunal Constitucional estima que no es necesario haber agotado la vía judicial del «procedimiento correspondiente», ya que, si bien el artículo 44.1 de la LOTC exige el agotamiento de todos los recursos utilizables, agotar los recursos y «procedimiento correspondiente» no son términos equivalentes: «El reconocimiento de un procedimiento más para reclamar el derecho nada tiene que ver, en sentido técnico,

1. Dicho párrafo dice: «Contra el auto que dicte el juez no se dará recurso alguno, pero si fuera denegatorio o se hubiera planteado oposición, quedará a salvo los derechos de las partes y del Fiscal para formular su pretensión en el procedimiento correspondiente».

2. ENTRENA KLETT, *Matrimonio, separación y divorcio*, Pamplona 1984, p. 491.

con el agotamiento de la vía de recursos a que se refiere la LOTC; aquél constituye un derecho que puede o no ejercitar la parte y que, de hacerlo, abre un nuevo cauce judicial que debe ser agotado antes de residenciar en sede constitucional el tema; pero que puede ser renunciado porque a nadie se le puede obligar al seguimiento de un nuevo proceso para remediar en su caso, una violación de un derecho fundamental ocurrido en un procedimiento distinto y agotado».

Aunque, como decíamos, esta aclaración pertenezca al ámbito de lo procesal, el último párrafo citado sitúa la cuestión en un marco que va más allá de lo meramente procedimental³.

Con respecto a las alegaciones del recurrente sobre el artículo 16.3 de la Constitución, el Tribunal sienta en su Fundamento jurídico 2º la doctrina de que la posibilidad de reconocimiento civil de sentencias y resoluciones eclesiásticas en materia matrimonial (reconocida en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979, y desarrollada en el artículo 80 del Código Civil), obedece al principio de colaboración enunciado en el artículo 16.3 de nuestra Carta Magna. El punto curioso en el razonamiento del Tribunal Constitucional radica en que -según nuestro Alto Tribunal-, dicha posibilidad se sustenta *a la vez*, tanto en la aconfesionalidad del Estado, como en el principio de cooperación⁴.

A mi modo de ver, el principio fundamental en el que podría fundamentarse la posibilidad mencionada, no es tanto el de aconfesionalidad y cooperación -conjuntamente-, como el de libertad religiosa, también recogido en la Constitución⁵, una de cuyas consecuencias (también reconocida a nivel legal) es que los ciudadanos españoles, a la hora de contraer

3. Sobre la repercusiones en el fondo, de estos aspectos procesales cfr. RODRIGUEZ CHACON, *En torno a la Disposición transitoria 2ª del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos suscrito entre España y la Santa Sede*, en «Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado», 1988, p. 579.

4. FERNANDEZ CORONADO, *Principio de igualdad y técnica de cooperación*, comentario sobre esta sentencia en «La Ley», 1983-2, pp. 79 y ss. Sobre los principios de libertad religiosa e igualdad vid. también: VILADRIK, *El principio de libertad religiosa*, en la obra colectiva «Derecho Eclesiástico del Estado Español», Pamplona 1983, pp. 214 y ss.; y VIANA, *La igualdad constitucional en el régimen jurídico español sobre confesiones religiosas*, en «Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado», 1987, pp. 375 y ss.

5. Cfr. artículos 14 y 16 de la Constitución. Cfr. también AMOROS, *La libertad religiosa en la Constitución Española*, Madrid 1984, pp. 154 y ss.

matrimonio, puedan hacerlo según las normas del derecho canónico⁶. Y por supuesto, en la subsiguientes relaciones de cooperación, concretadas para el ámbito matrimonial en el Acuerdo citado. Relaciones que instrumentan, a través del juicio de homologación con el Derecho del Estado, la salvaguardia de la soberanía y de la unicidad de la jurisdicción civil que exige la Constitución⁷, al mismo tiempo que dan una respuesta adecuada a las exigencia de igualdad de todos los ciudadanos, tal como pide el artículo 14, arbitrando un modo concreto de sujeción de todos los españoles al Derecho del Estado.

Es decir, el reconocimiento de sentencias canónicas de nulidad matrimonial por parte del Estado, no entraña a mi parecer ofensa a su aconfesionalidad -contra lo que opina Delas Ugarte⁸-, puesto que ese reconocimiento (por otra parte parcial) a la jurisdicción eclesiástica tiene lugar, precisamente, con ocasión de una opción de sus súbditos en el ejercicio de su libertad religiosa, reconocida por la Constitución. Más aún, la obligatoriedad y exclusividad de un posible matrimonio civil único y obligatorio, conllevaría una injustificable imposición de una especie de confesionalidad laica por parte del Estado, tan inaceptable (desde su punto de vista) como la confesionalidad religiosa. Lo que es tanto como afirmar que el principio de cooperación obedece y nace más bien del de libertad religiosa (e incluso del de igualdad); que del de aconfesionalidad⁹.

Salvo esta pequeña observación, el resto del razonamiento me parece bastante lógico. Así, en el Fundamento jurídico 3º se afirma justamente que «no aparecen indicios de violación del artículo 16.3 de la Constitución, pues la cooperación del Estado con la Iglesia Católica no implica automatismo en el reconocimiento de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos, ni se ve de qué modo la negativa al reconocimiento de efectos civiles daña el principio de igualdad (...) ya que, antes al contrario, el fundamento de la resolución contra la que se ejercita el

6. Cfr. artículos 49.2, 59 y 60 del Código civil. Cfr. sobre este punto, LOPEZ ALARCON-NAVARRO VALLS, *Curso de Derecho matrimonial canónico y concordado*, pp. 38 y ss.

7. Cfr. artículo 117, nn. 3 y 5 de la Constitución.

8. DELAS UGARTE, *Denegación de eficacia civil de sentencias canónicas de nulidad matrimonial y recurso de amparo*, en «Revista Jurídica de Catalunya», 1984, pp. 209-223.

9. Sobre la aconfesionalidad del Estado cfr. VILADRICH, *El principio de laicidad del Estado*, en la obra colectiva citada, pp. 214 y ss.

amparo, es el sometimiento de todos los Tribunales españoles al Derecho del Estado».

Donde sí aprecia nuestro Tribunal Constitucional violación de un derecho es en el contenido en el artículo 24.1 de la Constitución, que proclama el derecho a la tutela efectiva por parte de Jueces y tribunales. ¿En qué se concreta esta violación en el supuesto contemplado?

Como se recordará, el problema que originó este recurso se encuentra en el hecho de que el Juez civil aplicó el artículo 80 del Código civil y la Disposición Adicional 2ª de la ley 30/1981, a un supuesto al que claramente, en cambio, le era de aplicación lo establecido en la Disposición Transitoria 2ª del Acuerdo, que recoge el derecho transitorio para las causas iniciadas ante los Tribunales eclesiásticos antes de la entrada en vigor de dicho Acuerdo¹⁰.

A tenor de dicha Disposición Transitoria, la eficacia civil a la resolución que nos ocupa le hubiera debido de ser concedida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo XXIV del antiguo Concordato; es decir, de manera automática, puesto que según la norma referida, las resoluciones canónicas en materia matrimonial eran directamente ejecutables por el Tribunal civil¹¹. El hecho de haberse resuelto por auto, en los términos establecidos por el artículo 80 y la citada Disposición Adicional, además de constituir un error en la aplicación de la norma debida, convierte la resolución judicial en irrecurrible. De ahí la presunta indefensión. Veamos el razonamiento del Tribunal Constitucional.

Para nuestro Alto Tribunal el reconocimiento de la tutela judicial efectiva «implica el reconocimiento de los efectos de las resoluciones de los Tribunales predeterminados por la Ley por todos los órganos del Estado»; y añade que «si el reconocimiento a los católicos de someter sus relaciones matrimoniales a los Tribunales eclesiásticos aparece reconocido

10. La Disp. Trans. 2ª dice: «Las causas que estén pendientes ante los Tribunales eclesiásticos al entrar en vigor en España el presente Acuerdo seguirán tramitándose ante ellos y las sentencias tendrán efectos civiles a tenor de lo dispuesto en el artículo XXIV del Concordato de 1953». Cfr. también RODRIGUEZ CHACON, ob. cit., p. 564.

11. El artículo XXIV.3 del Concordato decía: «Las sentencia y resoluciones de que se trate, cuando sean firmes y ejecutivas, serán comunicadas por el Tribunal eclesiástico al Tribunal civil competente, el cual decretará lo necesario para su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará -cuando se trate de nulidad de dispensa *super rato*, o aplicación del privilegio paulino- que sean anotadas en el registro del estado civil al margen del acta de matrimonio».

en la legislación aplicable y si por otra parte, la obligación de reconocer los efectos civiles de las correspondientes resoluciones aparece también declarada, la negativa a proceder de esta suerte por parte del Organo del Estado, cuando se dan las circunstancias exigidas por dicha legislación, debe ser remediada».

A este respecto, en el voto particular a esta Sentencia, realizado por el magistrado Díez Picazo¹² en el que defiende su opinión negativa a la concesión de amparo, afirma que el Tribunal Constitucional «ha señalado en multitud de ocasiones que el referido precepto constitucional (el 24.1) da derecho al ciudadano a obtener de los tribunales de justicia una resolución fundada, pero en modo alguno una resolución que sea acorde con las pretensiones por él sostenidas»¹³. Sin embargo, no faltan sentencias del Tribunal Constitucional en las que este tribunal va más allá de esta «tutela devaluada»¹⁴ -recuérdese que el artículo 24.1 habla de tutela judicial *efectiva*-. Véase por ejemplo su sentencia de 7 de junio de 1982, en la que claramente se afirma que «el derecho a la tutela que dicho artículo consagra, no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes (...), ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en Derecho, sea o no favorable a la pretensión formulada si concurren todos los requisitos procesales para ello. *Exige también que el fallo judicial se cumpla*».

En el fondo, es lo que viene a reconocer la sentencia objeto de este comentario, al menos implícitamente, en los últimos párrafos del fundamento jurídico 3º, como ya hemos visto.

Por eso discrepo también de la interpretación del Profesor Delas Ugarte cuando, al comentar la tesis del Tribunal Constitucional de que, aún tratándose en este caso de un problema de legalidad ordinaria (aplicación de la norma prevista), puede tener incidencia en el mantenimiento de derechos fundamentales, afirma que «sobre la base de que toda infracción de la legalidad ordinaria afecta a la corta o a la larga a un derecho fundamental, obligaría a concluir que el Tribunal Constitucional se configura

12. Al que se adhirió también el Magistrado Rubio Llorente.

13. Cfr. STC de 30 de enero de 1985.

14. Miguel A. FERNANDEZ, *Lecciones de Derecho Procesal*, vol. III, Barcelona 1984, p. 37.

además como una cuarta instancia en el esquema de la organización de los Tribunales»¹⁵. Dicha argumentación me parece inexacta: la infracción de la legalidad ordinaria en el caso que estudiamos -como reconoce el Tribunal Constitucional- incide *directamente* en la vulneración de un derecho incluído en la tuela efectiva proclamada por el artículo 24.1, cual es, como hemos visto, el derecho a la ejecución de la sentencia (recordemos que en virtud del artículo XXIV del Concordato -cfr. Disposición Transitoria 2ª del Acuerdo- la sentencia canónica era directamente ejecutable).

A este respecto, es más clara y terminante la sentencia de 23 de mayo de 1985 cuando afirma que «el derecho a la tutela efectiva (...) exige que el fallo judicial se cumpla, pues lo contrario sería convertir las decisiones judiciales en meras declaraciones de intenciones»; y añade que «el proceso de reconocimiento de efectos civiles a las sentencias y resoluciones de los Tribunales eclesiásticos que prevé el artículo XXIV del Concordato es equiparable al de ejecución de una sentencia o resolución judicial. Por ello el reconocimiento de efectos civiles a las sentencias canónicas que deriva del régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria 2ª del Acuerdo de 3.I.79 ha de encuadrarse dentro de la exigencia constitucional contenida en el artículo 24.1 de la Constitución. Por tanto (...) la negativa del Juez civil a proceder en los términos legalmente fijados supone una vulneración del mencionado precepto constitucional».

Como puede verse, a pesar de una identidad sustancial en el fondo de los argumentos del Tribunal Constitucional en estas dos sentencias, las razones aducidas en esta última son más explícitas y concretas. Pienso que, con respecto a esta última sentencia, no hubiera habido lugar a un voto particular como el del Magistrado Díez Picazo.

Por último no me resisto a traer a colación uno de los puntos aducidos por el Fiscal. Para éste, en el caso concreto que estudiamos se ha producido la vulneración de un Tratado internacional rubricado por España, en cuanto que la aplicación del artículo 80 del Código Civil, al exigir los controles enunciados en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, va más allá de lo estipulado por las Altas Partes en el artículo VI del Acuerdo, «debiendo prevalecer en caso de discrepancia las normas de este último». Es una pena que el Tribunal Constitucional no haya entrado

15. DELAS UGARTE, ob. cit., p. 221.

en el fondo del tema, porque hubiera podido dirimir las controversias doctrinales sobre el valor y el alcance de las exigencias del famoso 954, que incluyó el artículo 80, al margen de lo pactado en el Acuerdo: ¿es realmente un añadido inconstitucional, como pretenden algunos?, o ¿se trata únicamente de una explicación de en qué consiste el ambiguo «ajuste al Derecho del Estado», mencionado en primer lugar por el artículo VI del Acuerdo?

No entra en el tema, como decía, el Tribunal Constitucional, pero en su Fundamento jurídico 5º no deja de realizar una afirmación interesante, cuando dice que «no podemos menos de constatar que este Acuerdo del Estado Español y la Santa Sede tiene rango de tratado internacional y, por tanto, como aprecia el Fiscal, se inserta en la clasificación del artículo 94 de la Constitución (...) y una vez aplicado oficialmente el tratado, forma parte del ordenamiento interno».

Otro tema que permanece abierto es el de la presunta inconstitucionalidad de dicho Acuerdo. Recordemos que, aunque de fecha posterior a la de nuestra Carta magna, su conclusión práctica es anterior. Cabría pues en línea de hipótesis que su contenido -no así el proceso de su aprobación- no fuera conforme con los principios de la Constitución¹⁶. El Tribunal Constitucional no entra tampoco en el fondo, aduciendo que no ha recibido mandato para ello. Al menos, y por lo que toca al caso que nos ocupa, no parece que vulnere ningún principio constitucional; ni en el terreno de la igualdad, ni en el de la libertad religiosa, siendo además respetuoso con los derechos adquiridos¹⁷.

Sentencia 265/88, de 22 de diciembre

Se trata de otra sentencia sobre pretendida violación del artículo 24.1, en un caso de reconocimiento de efectos civiles a una decisión pontifica sobre matrimonio rato y no consumado.

16. «El contenido del principal instrumento jurídico de relación entre España y la Iglesia Católica se ha fijado al margen de la Constitución. Lo cual significa que independientemente de que su contenido sea contrario o conforme a la misma, lo que es claro es que por inexcusables razones cronológicas, puede ser calificado como *praeter Constitutionem*» (I. IBAN, *Lecciones de Derecho Eclesiástico*, Madrid 1987, p. 105).

17. FERNÁNDEZ CORONADO, ob. cit., p. 18.

Veamos sucintamente los hechos: solicitada por uno de los cónyuges la disolución del matrimonio, por inconsumación, ante la correspondiente autoridad eclesiástica, e iniciado el expediente canónico, el otro cónyuge -ahora recurrente- fue citado a comparecer, pero no se presentó.

Concedida la dispensa por el Papa, la actora solicitó del Juez civil competente el reconocimiento de efectos civiles. El Juez, en aplicación del artículo VI del Acuerdo de 3 de enero de 1979 con la Santa Sede, y siguiendo el procedimiento previsto en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/1981, dictó auto otorgando dichos efectos, pese a que la otra parte hubiera formulado oposición.

El ahora actor solicitó el amparo constitucional por presunta violación de los artículos 14, 16 y 24 de la Constitución.

Por lo que respecta al artículo 24.1, el recurrente arguye que su violación estriba en que el Juez aplicó de modo erróneo, tanto los preceptos sustantivos aplicables, como el procedimiento, con un resultado final que abocaba en indefensión.

Por un lado, el Juez aplicó exclusivamente el artículo VI.2 del citado Acuerdo, prescindiendo del artículo 80 del Código Civil, que exige verificar el ajuste al Derecho del Estado a través de los requisitos del artículo 954 de la LEC. El hecho tiene su importancia, pues el recurrente pretende que el procedimiento canónico se siguió y sustanció en rebeldía, y éste es uno de los puntos que, en virtud del artículo 954 de la LEC, impediría el ajuste al Derecho del Estado (otro problema es que, como afirma el interesado, el expediente canónico no ofrezca las suficientes garantías procesales, por no respetar, en su opinión, los principios de igualdad, contradicción y probatorio)¹⁸.

Por otra parte, afirma también que, aplicar el procedimiento prescrito por la Disposición Adicional 2ª y no admitir su oposición (no meramente formularia, sino fundada), y a pesar de todo dictar auto estimatorio, siendo éste irrecurrible, le sitúa en una posición de clara indefensión.

Según el recurrente, además, el hecho de haber formulado oposición, según el tenor de la mencionada Disposición Adicional, hubiera obligado al Juez a cerrar el procedimiento (o denegar la pretensión). Pone también

18. Sobre las garantías procesales en el procedimiento canónico en caso de rebeldía, cfr. LOPEZ ALARCON, *El matrimonio canónico con efectos civiles en el Derecho español*, en «Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado», 1986, p. 189.

en evidencia el contrasentido en que se incurriría, en el hipotético caso de que en el «procedimiento correspondiente» la resolución fuere denegatoria, ya que el auto anterior habría producido sus efectos civiles (con la consiguiente inscripción registral) y cabría la posibilidad de encontrarse con una situación de bigamia.

A pesar de las razones expuestas, el Fiscal considera que no ha lugar al amparo. En primer lugar, en su opinión, no ha habido vulneración del artículo 24.1 ya que la resolución contra la que se recurre, razonada y motivada, ha dado una respuesta fundada en Derecho a la pretensión¹⁹; y en cualquier caso, siempre queda abierta al recurrente la posibilidad de plantear su pretensión en el famoso «procedimiento correspondiente»²⁰.

Por ende, la pretendida indefensión durante el proceso canónico, es claramente culpable: la parte interesada fue citada en forma y no compareció. Querer, por otra parte, transformar ésta en un segundo momento de la argumentación, en rebeldía (a efectos de invocar el 954.2 de la LEC) constituiría un auténtico *fraus legis*²¹.

Por otro lado, la aplicación directa del Artículo VI.2 del Acuerdo, con exclusión de otras normas presuntamente aplicables, no supone para el Fiscal ninguna discriminación y cae dentro de la discrecionalidad que corresponde al Juez para seleccionar y aplicar la norma que considere más oportuna al supuesto fáctico²².

Con respecto a la invocación de los principios de libertad religiosa y aconfesionalidad, asegura que, amén de no fundamentados, «constituyen un colofón retórico de alegaciones». Veamos a continuación las razones por las que el Tribunal Constitucional determinó otorgar el amparo solicitado.

Pasa por alto en primer lugar sobre la pretendida carencia de garantías procesales del procedimiento canónico en cuestión, en razón a que «la vía del recurso de amparo constitucional no podría alcanzar al examen y enjuiciamiento de la actuación de los órganos que en el ámbito del ordenamiento canónico desempeñan funciones de naturaleza judicial

19. Cfr. STC de 30 de enero de 1985.

20. Sobre cuál sea éste, a nivel teórico hay distintas opiniones: para unos, el declarativo de menor cuantía; para otros, el descrito en la Disposición Adicional 5ª de la Ley 30/1981. En la praxis judicial se aplica el de menor cuantía.

21. ALBADALEJO, *Curso de Derecho Civil*, vol. IV, Barcelona 1984, pp. 106 y ss.

22. Cfr. Fundamento jurídico 3º de la STC de 12 de noviembre de 1982.

o administrativa, puesto que el recurso de amparo se da contra los actos de los Poderes Públicos del Estado». Nada que objetar a esta observación de nuestros jueces constitucionales, como no sea que esta pretendida carencia de garantías procesales puede de hecho tener una incidencia directa en la concesión de los efectos civiles si se aplican estrictamente los requisitos previstos por el artículo 954 de la LEC, como luego veremos.

Pasa a continuación el Tribunal a examinar cuál es la normativa aplicable a los casos de petición de efectos civiles de resoluciones canónicas en el campo matrimonial (nulidades y disolución de matrimonio rato y no consumado), y centra la cuestión en la dilucidación de si la actuación judicial recurrida ha supuesto quebrantamiento del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, con la secuela de indefensión.

En este punto el Tribunal Constitucional viene a responder indirectamente al Fiscal, al definir como un conjunto normativo orgánicamente integrado y aplicable al caso en cuestión, al formado por el Artículo VI del Acuerdo, el 80 del Código civil, y la Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/1981.

Reitera a continuación la doctrina de que no es tarea del Tribunal Constitucional garantizar la correcta interpretación y aplicación de las leyes, «salvo que en dicha actividad se apreciara la violación de algún derecho o garantía constitucional».

Efectivamente, reconoce que el Juez, además de dictar auto estimatorio pese a haberse planteado oposición fundada «en razón a que queda a salvo el derecho de las partes a formular su pretensión en el procedimiento correspondiente», negó toda eficacia «al precepto sustantivo que (...) impone la observancia, entre otros, del requisito contenido en el art. 954.2 de la LEC». Vuelve el Tribunal Constitucional a iterar el criterio -aunque sin responder directamente al Fiscal- de la imposibilidad de separar la aplicación del Artículo VI del Acuerdo, del resto de la normativa sobre la materia, en la medida en que ésta es desarrollo de aquél (punto éste que se vuelve a recordar, aunque como de pasada, en el Fundamento jurídico 4º).

Por otra parte, se reconoce también que «la interpretación realizada por el Juez para soslayar la alegación de indefensión, tras la oposición expresamente formulada por la parte ahora recurrente, no sólo carece de fundamento correcto en Derecho, sino que ha motivado una lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

Interpreta a continuación el sentido y alcance de la famosa Disposición Adicional 2ª. Interpretación que es tanto más de agradecer por -son palabras del Tribunal Constitucional- la «incorrecta y ambigua redacción» de la citada norma. La tesis en sustancia es ésta: si hay oposición, el procedimiento homologatorio se cierra, y queda abierta la posibilidad del «procedimiento correspondiente». Igual cosa sucede si el auto fue denegatorio. Es decir, el procedimiento descrito en la Adicional 2ª está previsto *únicamente* para el caso de que no haya oposición; si el procedimiento se hace contencioso por la formulación de oposición, hay que acudir al otro procedimiento previsto por la ley. Por tanto, en el caso objeto del amparo, no cabía dictar auto estimatorio, pues se había presentado oposición.

Volviendo al hecho origen de la violación constitucional, la indefensión viene identificada en la circunstancia de que el interesado fue erróneamente reenviado a un procedimiento que no está previsto en la ley, ya que sólo puede acudir a él en el caso de que el auto hubiera sido denegatorio o se hubiera sobreseído el procedimiento.

Además, entraría en juego también en este caso la doctrina formulada a raíz de la sentencia anteriormente vista de que «a nadie se le puede exigir el seguimiento de un nuevo proceso para remediar (...) una violación de un derecho fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado».

A mi parecer, el punto más interesante de la sentencia es la interpretación reseñada sobre la tan traída y llevada Disposición Adicional 2ª, pues en cuanto al resto de los puntos, no se hace sino reiterar principios que, aunque importantes, eran ya conocidos a raíz de la sentencia de 12 de noviembre de 1982 y de alguna otra, citada también a propósito del comentario de aquella²³.

Sin embargo, en los Fundamentos jurídicos 4º y 5º se ofrece una abigarrada, pero interesante interpretación sobre aspectos hartos interesantes para nuestra disciplina. Por desgracia, el Tribunal Constitucional no entra en el fondo, y se limita a formular algunas precisiones en tono generalizador.

Por ejemplo: sobre la pretendida indefensión y rebeldía en el procedimiento canónico, aducidas por el recurrente, el Tribunal se limita a

23. Cfr. STC de 7 de junio de 1982, 30 de enero de 1985 y 23 de mayo de 1985.

afirmar que «baste señalar que la oposición explícitamente manifestada, unida a la incomparecencia en el procedimiento canónico, constituyen circunstancias obstativas que forman parte y cobran especial relevancia en el sistema vigente plasmado por el legislador en relación con la ejecución de sentencias matrimoniales canónicas en el ámbito civil». Pero no aclara la entidad e incidencia de esa «circunstancias obstativas» en la concesión de efectos civiles.

Por otro lado, afirma también que «el automatismo en el presente caso de la concesión de efectos civiles a una decisión acordada en el ámbito de la jurisdicción canónica está reñido con la plenitud y exclusividad de que gozan los Jueces y Tribunales en el ejercicio de su potestad de jurisdicción conforme establece el art. 117.3 C.E., lo que encuentra adecuado reflejo en el art. VI.2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos (...) al establecer que las resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado». Así pues, se excluye la posibilidad de una concesión automática de efectos civiles (salvo, obviamente, en los casos de derecho transitorio), y se exige, de acuerdo con los términos pactados, un ajuste al Derecho del Estado. El problema surge -o puede surgir- cuando se intenta ajustar al Derecho del Estado una institución canónica tan peculiar como las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, que no tienen paralelo o equivalente en el ordenamiento civil²⁴.

En efecto, si se quisieran aplicar estrictamente las condiciones del artículo 954 de la LEC, podría resultar asaz dificultoso el pretendido ajuste. Por otra parte, no cabe pensar que el Estado, al pactar con la Santa Sede la inclusión de este supuesto entre aquellos susceptibles de recibir efectos civiles, ignorara su peculiaridad y arbitrara unos medios de control que imposibilitaran el cumplimiento de lo acordado²⁵. En el fondo se observa, tanto en el orden normativo como en el jurisprudencial, una cierta ambigüedad de fondo, al intentar conjugar las exigencias constitucionales con los compromisos solemnemente pactados con la Santa Sede.

Afortunadamente (al menos hasta ahora), la praxis judicial, con muy buen sentido, ha concedido los efectos civiles siempre que no se

24. En la nueva regulación de la materia en el Acuerdo de Villa Madama, que sustituye a los Pactos Lateranense, la dispensa *super rato* no es susceptible de efectos civiles.

25. ALBADALEJO, ob. cit., p. 111.

hubiera formulado oposición, sin entrar en mayores disquisiciones²⁶.

También indirectamente, el Tribunal Constitucional sale al paso de la presunta inconstitucionalidad, sea del Acuerdo, sea del resto de las normas aplicables, al afirmar que dicho conjunto normativo es «susceptible de una interpretación conforme a la Constitución». Recordemos al respecto que, en la sentencia 66/1982 el Tribunal había declarado que no se había presentado por vía institucional ninguna alegación sobre la inconstitucionalidad de dicho Acuerdo.

Consideraciones finales

Después de lo visto, estamos ya en condiciones de establecer una serie de conclusiones, a modo de resumen, sobre las tesis mantenidas por nuestro Alto Tribunal a raíz de las dos sentencias estudiadas.

— La selección y aplicación de la norma aplicable al supuesto fáctico, es una cuestión de legalidad ordinaria, y como tal, entra en el poder discrecional del Juez. El mero error en esa selección y aplicación (o inaplicación), no entraña en si mismo inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional sólo puede entrar en un problema de este tipo cuando el error suponga un atentado contra alguno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

— El reconocimiento de la tutela judicial efectiva implica el reconocimiento de los efectos de las resoluciones de los Tribunales predeterminados por la ley. Es decir, la tutela efectiva exige el cumplimiento o ejecución de las sentencias.

— El Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos con la Santa Sede tiene naturaleza y rango de Tratado internacional, y forma parte de nuestro ordenamiento interno. Constituye también una forma concreta de instrumentar el principio de cooperación enunciado en el artículo 16.3 de la Constitución. En principio, los derechos reconocidos a los católicos en dicho Acuerdo, no suponen ninguna quiebra del principio de igualdad, ni del de libertad religiosa, ni del de aconfesionalidad del Estado.

26. NAVARRO VALLS, *El matrimonio concordatario ante el Derecho Español y el Derecho Italiano*, en «Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado», 1988, p. 256.

— El Artículo VI del Acuerdo y las leyes internas que lo desarrollan, forman un conjunto normativo cuya interpretación y aplicación ha de hacerse conforme a los principios constitucionales; de hecho, todas estas normas son susceptibles de una interpretación plenamente acorde con nuestra Carta Magna.

Por último, se encuentran en estas dos sentencias dos aclaraciones sobre dos aspectos de tipo procesal que, en virtud de la poca claridad en la redacción de la Disposición Adicional 2ª, habían originado no pocas interpretaciones, algunas de ellas contradictorias.

— En primer lugar se especifica que el agotamiento de la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo, no incluye la abierta por el famoso «procedimiento correspondiente».

— Por último, sobre la naturaleza del peculiar procedimiento descrito en dicha Disposición Adicional y la incidencia en el mismo de la oposición de parte, se establece que la formulación de oposición convierte el procedimiento en contencioso, lo que obliga al Juez a cerrarlo, dejando abierta a las partes la posibilidad de perseguir su pretensión en un procedimiento ordinario.